

KENNETH ROTH

# Guerra en Irak: no fue una intervención humanitaria

*Según se conjeturaba, la intervención humanitaria debía haber desaparecido con el fin de la década de 1990. El uso de la fuerza militar más allá de las propias fronteras nacionales para poner fin a matanzas a gran escala era considerado el lujo de una época en la que las preocupaciones sobre la seguridad nacional entre las grandes potencias eran menos apremiantes, y en la que los problemas de la seguridad humana lograron hacerse hueco. Somalia, Haití, Bosnia, Kosovo, Timor Oriental, Sierra Leona, intervenciones que fueron justificadas, en distintos grados, en términos humanitarios, posteriormente se rechazaron como productos de un intervalo inusual entre las tensiones de la guerra fría y la creciente amenaza del terrorismo. Se dijo que el 11-S cambió todo aquello al volver a poner el énfasis en nuevos y más inmediatos retos a la seguridad. Pero, sorprendentemente, con la campaña contra el terrorismo en curso, a lo largo del año pasado se han registrado unas cuatro intervenciones militares calificadas por sus instigadores como parcial o totalmente humanitarias.*

En principio, solo se puede recibir este renovado interés por el devenir de víctimas en tierras lejanas con satisfacción. ¿Qué podría ser más virtuoso que arriesgar la vida y la integridad física para salvar a otras personas de la masacre? Pero, el uso habitual de la etiqueta de lo humanitario oculta importantes diferencias entre estas intervenciones. La actuación francesa en la República Democrática del Congo, luego apoyada por una presencia reforzada de fuerzas de paz de Naciones Unidas, fue en la que se observó con mayor claridad un verdadero deseo de poner fin a la masacre que se estaba desarrollando. En Liberia y en Costa de Marfil, las tropas francesas y de África occidental intervinieron para garantizar la implementa-

Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch. Este artículo pertenece al informe anual *World Report 2004. Human Rights and armed conflict*, publicado por Human Rights Watch, 2004

Traducción:  
Leandro Nagore

ción de un plan de paz, pero también realizaron un importante papel humanitario. (EEUU participó, brevemente, en Liberia, pero las tropas que desplegaron tuvieron una repercusión mínima). Todas estas intervenciones en África fueron aprobadas, en un primer momento o con posterioridad, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cada uno de estos casos, el Gobierno nacional reconocido prestó su consentimiento a la intervención, aunque bajo distintos grados de presión.

A modo de contraste, las fuerzas de la coalición liderada por EEUU en Irak justificaron la invasión de éste país bajo distintos conceptos, tan solo uno de los cuales –y de menor importancia– era el humanitario. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no aprobó la invasión, y el Gobierno iraquí, por su parte, con su propia existencia en juego, se opuso de forma virulenta a ésta. Además, mientras que las intervenciones en África fueron de dimensiones bastante modestas, la guerra de Irak fue de enormes proporciones, incluyendo una campaña de bombardeo masivo y el despliegue de unas 150.000 tropas de distintos Ejércitos de tierra.

El tamaño de la invasión de Irak y la participación destacada por parte de la superpotencia mundial, junto con la enorme controversia que suscitó esta guerra, hacen que este conflicto haya ensombrecido las demás acciones militares. Para bien o para mal, esta prominencia le ha dado un mayor poder para formar las percepciones de la opinión pública en cuanto a las intervenciones armadas que, según sus promotores se justifican por motivos humanitarios. El resultado es que en una época de renovado interés por el concepto de la intervención humanitaria, la guerra en Irak y los esfuerzos por justificarla, aunque sea en parte, con motivos humanitarios amenazan con dar a la acción humanitaria una mala reputación. Si este hecho da pie al cinismo respecto al uso de la fuerza militar por motivos humanitarios, podría resultar devastador para aquellas personas que en el futuro necesiten ser socorridas.

Human Rights Watch no suele tomar posiciones sobre si un Estado debe o no recurrir a la guerra. Las cuestiones que están en juego suelen extenderse más allá de nuestro mandato, y una posición neutral maximiza nuestra capacidad de hacer presión para que las partes en conflicto eviten dañar a los no combatientes. La única excepción que hacemos es en aquellos casos extremos que necesiten de la intervención humanitaria.

Ya que el objetivo principal de la guerra en Irak no fue salvar al pueblo iraquí de la masacre, y porque entonces no ocurría ni era inminente ninguna masacre, en ese momento Human Rights Watch no tomó ninguna posición a favor o en contra de la guerra. Un razonamiento humanitario se ofrecía, de vez en cuando, respecto del motivo de esta guerra, pero era tan claramente secundario respecto a otras razones que no consideramos que había ninguna necesidad de abordarlo. Efectivamente, si Sadam Husein hubiese sido derrocado, y la cuestión de las armas de destrucción masiva tratada de forma eficaz, claramente no habría habido una guerra, incluso si el Gobierno sucesor hubiese sido igual de represivo. Algunos argumentaron que Human Rights Watch debería apoyar una guerra iniciada por otros motivos si, potencialmente, podría lograr mejoras significativas en cuanto al respeto de los derechos humanos. Pero el tremendo riesgo de que gue-

rras no guiadas por objetivos humanitarios harían peligrar los derechos humanos, nos impide adoptar tal posición.

Con el tiempo, las principales justificaciones ofrecidas en un primer momento para librar la guerra en Irak perdieron gran parte de su validez. Más de siete meses después de que se declarase el fin de las hostilidades mayores aún no han sido encontradas las armas de destrucción masiva. Tampoco se ha encontrado ningún vínculo, anterior al conflicto, entre Sadam Husein y el terrorismo internacional. La dificultad para establecer instituciones estables en Irak está reduciendo la posibilidad de que el país se convierta en una plataforma avanzada para promover la democracia en Oriente Medio. Mientras pasan los días, la justificación dominante que le queda al Gobierno de Bush para justificar la guerra es que Sadam Husein era un tirano que se merecía ser derrocado —un argumento para la intervención humanitaria—. El Gobierno de Bush ahora cita esta causa no sólo como un efecto positivo, aunque secundario, de la guerra sino como la principal justificación de la misma. Otros motivos también se siguen citando de forma regular, pero tan sólo el humanitario ha visto como aumentaba su protagonismo.

¿Es esta justificación válida? La cuestión no está tan sólo en determinar si Sadam Husein fue un líder despiadado, algo que claramente fue. La pregunta sería más bien saber si se daban las condiciones para justificar una intervención humanitaria —condiciones que van más allá del grado de represión—. Si así fuera, la sinceridad nos exigiría conceder esta verdad a pesar del nivel de rechazo global hacia esta guerra. Si no, sería igual de esencial reconocerlo, ya que permitir que los argumentos de la intervención humanitaria sirvan como pretexto para una guerra librada principalmente por otros motivos, amenaza con mancillar un principio cuya viabilidad podría ser esencial para salvar innumerables vidas.

Al examinar si la invasión de Irak puede ser considerada como una intervención humanitaria, nuestro propósito no es el de determinar si la coalición liderada por EEUU debería haber recurrido a la guerra por otros motivos. Esto, tal como hemos indicado, requeriría juicios de valor que van más allá de nuestro mandato. Ahora que los instigadores de la guerra se apoyan tan significativamente en razonamientos humanitarios para justificarla, la necesidad de evaluar esta justificación es cada vez más importante. Concluimos que, a pesar de los horrores del mandato de Sadam Husein, la invasión en Irak no se puede justificar como una intervención humanitaria.

## **Los estándares para una intervención humanitaria**

Human Rights Watch, a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, tiene una larga tradición respecto a una política sobre intervención humanitaria. Las guerras a menudo conllevan enormes costes humanos, pero reconocemos que la necesidad imperativa de detener o de prevenir el genocidio, u otro tipo de matanza sistemática, puede, en ocasiones, justificar el uso de la fuerza militar. Por este motivo, Human Rights Watch, en algunas, pocas, ocasiones ha abogado por la intervención humanitaria —por ejemplo para intentar poner fin al genocidio en Ruanda y en Bosnia—.

*Permitir que  
la interven-  
ción humani-  
taria sirva  
como pretexto  
para una  
guerra  
librada  
principal-  
mente por  
otros motivos,  
amenaza con  
mancillar un  
principio  
esencial para  
salvar  
innumerables  
vidas*

No obstante, el recurso a la acción militar nunca debe tomarse a la ligera, ni siquiera por motivos humanitarios. Se podría recurrir a la fuerza militar más fácilmente cuando un gobierno enfrentado a serios abusos en su territorio nacional invita a otros Estados a que le brinden asistencia militar —como ocurrió en el caso de tres recientes intervenciones en África—. Pero la intervención militar por motivos humanitarios demostrables, sin el consentimiento del gobierno nacional, debería realizarse con extrema cautela. En la elaboración de los estándares que consideramos deberían gobernar las acciones militares no consensuadas, nos remitimos a los principios fundamentales de nuestra propia política sobre la intervención humanitaria y sobre nuestras experiencias en su aplicación. También tenemos en cuenta otras fuentes relevantes, incluido el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal, que cuenta con el patrocinio del Gobierno canadiense.

A nuestro parecer, y como aspecto básico, la intervención humanitaria que tiene lugar sin el consentimiento del gobierno afectado solo puede ser justificada en casos de genocidio inminente o en curso, otras masacres o políticas similares de destrucción de vidas. Como verdad sabida, baste decir que la guerra es peligrosa. En teoría puede ser de gran precisión, pero la realidad es a menudo muy destructiva, con el riesgo siempre presente de importantes derramamientos de sangre. Tan solo el asesinato a gran escala puede justificar, en nuestra opinión, la muerte, destrucción y desorden inherentes a la guerra y a la posguerra. Otras formas de tiranía son deplorables, y vale la pena esforzarse al máximo para que cesen pero, a nuestro parecer, no son tales como para justificar la respuesta excepcional que sería el recurso a la fuerza militar. Tan solo las matanzas masivas podrían justificar la pérdida deliberada de vidas que implica el uso de la fuerza militar en nombre de propósitos humanitarios.

Además, la capacidad para recurrir a la fuerza militar es limitada. Fomentar su uso para hacer frente a abusos menores podría suponer rebajar la capacidad para intervenir en aquellos casos en los que las atrocidades son más graves. La invasión de un país, sobre todo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también pone en peligro al orden jurídico internacional, que a su vez es de enorme importancia en la protección de los derechos humanos. Por estos motivos, consideramos que la intervención humanitaria debería reservarse para aquellas situaciones en las que se producen matanzas masivas.

Somos conscientes de que el término “masivo” es subjetivo, que permite numerosas interpretaciones, y no proponemos una única medida cuantitativa. También reconocemos que el nivel de muertes que nosotros, como organización de defensa de los derechos humanos, podríamos considerar como suficiente para justificar una intervención humanitaria podría ser muy distinto al de un gobierno. Sin embargo, en cualquier caso, y teniendo en cuenta los enormes riesgos potenciales que conlleva el uso de la fuerza militar, la intervención humanitaria debería ser una medida excepcional, reservada para los casos más extremos.

Si esta precondition se cumple, se pueden considerar otros cinco factores que ayudan a determinar si el uso de la fuerza militar puede ser caracterizada como humanitaria:

- 1º- Una acción militar debe ser la última opción razonable posible para poner fin, o prevenir, las masacres. En caso de que existan alternativas efectivas, la fuerza militar no debe ser usada por motivos humanitarios.
- 2º- La intervención debe ser guiada principalmente por un objetivo humanitario. No esperamos la inocencia total de las motivaciones, pero el humanitarismo debería ser el motivo principal para una acción militar.
- 3º- Se debe realizar todo esfuerzo posible para asegurar que los medios utilizados para intervenir cumplen con el respeto de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. No creemos en que algunos abusos son tolerables en nombre de la erradicación de otros.
- 4º- Debe ser razonablemente probable que la acción militar traerá mayores beneficios que daños. La intervención humanitaria no debe ser emprendida si existe la posibilidad de que genere una mayor conflagración o cause un sufrimiento significativamente mayor.
- 5º- Preferimos que toda intervención humanitaria cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas u otros organismos con una autoridad multilateral significativa. Sin embargo, a la luz de la naturaleza imperfecta de la gobernanza internacional actual, no exigiríamos la aprobación multilateral previa en un contexto de emergencia.

## **Dos consideraciones irrelevantes**

Antes de aplicar estos criterios al caso iraquí, merece la pena destacar dos factores que no consideramos relevantes en nuestra evaluación sobre si una intervención se puede justificar como humanitaria. En primer lugar, somos conscientes, pero rechazamos, el argumento de que una intervención humanitaria no puede ser justificada si se hace caso omiso a lo que ocurre en otros lugares, igual o más necesitados. La represión en Irak fue severa, pero se podría argumentar que en otros lugares fue aún peor. Por ejemplo, se estima que en los últimos años unos tres millones de personas o más han perdido la vida por la violencia, la enfermedad y la exposición a los elementos en el conflicto que tiene lugar en el este de la República Democrática del Congo (RDC). No obstante, la intervención que tuvo lugar en la RDC llegó tarde y, en relación con lo ocurrido en Irak, fue bastante modesta. Sin embargo, si las matanzas en Irak fueron motivo suficiente para una intervención militar, sería cínico hacer caso omiso del triste destino de estas víctimas simplemente porque otras fueron olvidadas. En este caso, la intervención debería ser promovida en ambos lugares, y no rechazada en uno con la excusa de ser menor o inexistente en el otro.

En segundo lugar, somos conscientes, pero también rechazamos, el argumento de que la complicidad de EEUU en la represión iraquí en el pasado le deslegitimaría para realizar una intervención militar en Irak con criterios humanitarios. Este razonamiento se fundamenta en el sórdido historial del Gobierno estadounidense en Irak durante los años ochenta y principios de los noventa. Cuando el Gobierno iraquí utilizaba armas químicas contra las tropas iraníes en los años ochenta, el Gobierno de Reagan le ofrecía información de inteligencia. Tras el genocidio ocu-

rrido en Anfal contra la población kurda de Irak, en 1988, el Gobierno de Reagan, y luego el Gobierno del primer Bush, ofrecieron a Bagdad miles de millones de dólares en créditos en especie y en garantías de préstamos para la importación. La supresión despiadada por parte del Gobierno iraquí del levantamiento de 1991 fue facilitada por el acuerdo suscrito por el Gobierno de Bush padre para el uso iraquí de helicópteros —permiso aún más vergonzoso teniendo en cuenta que el entonces presidente Bush había incitado esta misma revuelta—. En cada uno de estos casos, Washington consideró que era más importante derrotar a Irán o recortar la influencia iraní en un Irak potencialmente desestabilizado, que disuadir o prevenir una masacre a gran escala. Nosotros condenamos tales cálculos estratégicos. Sin embargo, no negaríamos auxiliar a potenciales víctimas de un genocidio simplemente por el hecho de que la parte que se propone intervenir tuvo las manos sucias en el pasado.

### **La intensidad de las matanzas**

De los criterios que justificarían una intervención militar el más importante es el grado de las matanzas: ¿estaba ocurriendo, o era inminente, un genocidio o matanza masiva comparable? Siendo brutal como fue el régimen de Sadam Husein, el alcance de las muertes de las que se puede responsabilizar a su Gobierno en marzo de 2003 no era ni excepcional ni de una magnitud tan terrible como para justificar una intervención humanitaria. No nos hacemos ninguna ilusión en cuanto a la desalmada inhumanidad de Sadam Husein. Habiendo dedicado bastante tiempo y esfuerzo en documentar sus atrocidades, estimamos que en los últimos veinticinco años de Gobierno del partido Baath en Irak, el Ejecutivo iraquí asesinó o hizo “desaparecer” a cerca de 250.000 iraquíes. Además, debemos considerar abusos como el uso de armas químicas contra soldados iraníes. Sin embargo, en marzo de 2003, en vísperas de la invasión de Irak, el número de asesinatos atribuibles a Sadam Husein había disminuido.

Hubo épocas en las que los asesinatos eran tan intensos que una intervención humanitaria hubiera sido justificable —por ejemplo durante el genocidio de Anfal, en 1988, en el cual el Gobierno iraquí acabó con la vida de unos 100.000 kurdos—. Human Rights Watch, aunque en 1988 aún estaba comenzando y todavía no operaba en Oriente Medio, defendió en 1991 algún tipo de intervención militar en relación a la cuestión iraquí. Mientras los kurdos iraquíes huían en masa de la brutal represión del régimen de Sadam Husein tras el levantamiento que tuvo lugar tras la Guerra del Golfo, se encontraban desamparados y morían bajo el duro clima invernal de la montañosa frontera con Turquía, nosotros abogamos por la creación de una zona de exclusión aérea en el norte de Irak, para que pudiesen volver a sus hogares sin tener que hacer frente a un nuevo genocidio. Hubo otras épocas de intensas matanzas, como en la supresión de las revueltas de 1991. Pero en vísperas de la última guerra en Irak, nadie sugiere que el Gobierno de dicho país estaba involucrado en matanzas de una magnitud similar, ni que lo hubiera estado durante bastante tiempo. “Mejor tarde que nunca” no es una justificación para una intervención humanitaria que debería ser contemplada tan sólo

para detener matanzas masivas, y no para castigar a sus responsables, por muy deseable que sea tal castigo en tales circunstancias.

Pero si Sadam Husein cometió atrocidades masivas en el pasado, ¿su derrocamiento no sería justificable para prevenir que volviese a perpetrar tales atrocidades en el futuro? No. Human Rights Watch acepta que la intervención militar puede ser necesaria no sólo para poner fin a una masacre en curso, sino también para prevenir futuras matanzas, aunque éstas tienen que ser inminentes para justificar la respuesta excepcional que es el uso de la fuerza militar con propósitos humanitarios preventivos. Tiene que haber pruebas de que una masacre a gran escala está siendo preparada y que está a punto de iniciarse, salvo que se interrumpa por medios militares. Pero nadie sugirió seriamente antes del inicio de la guerra que el Gobierno de Sadam Husein estaba preparando una inminente masacre masiva, y hasta ahora no hay ninguna prueba que indique lo contrario. Hubo quienes alegaron que Sadam Husein, por sus antecedentes de utilización de armas químicas contra soldados iraníes y kurdos iraquíes, tenía previsto entregar armas de destrucción masiva a redes terroristas, pero estas alegaciones son del todo especulativas y aún no se ha encontrado ninguna prueba sustanciosa. También se temía que el Gobierno iraquí intentaría hacer frente a una invasión mediante el uso de armas químicas y biológicas, incluso contra su propio pueblo, pero nadie sugirió, seriamente, que esta medida sería una posibilidad inminente ante la ausencia de una invasión.

Esto tampoco significa que se deben olvidar las atrocidades del pasado. Por el contrario, sus instigadores deberían ser juzgados. Human Rights Watch ha dedicado un enorme esfuerzo en la investigación y documentación de las barbaridades del Gobierno iraquí, con especial énfasis en el genocidio de Anfal contra los kurdos iraquíes. Hemos entrevistado a testigos y supervivientes, exhumado tumbas colectivas, tomado muestras de tierra para demostrar el uso de armas químicas, e intentado sortear las toneladas de documentos de la policía secreta iraquí. Hemos dado la vuelta al mundo intentando convencer a algún gobierno —a cualquiera— para que emprendiesen acciones legales contra Irak por genocidio. Nadie lo hizo. A mediados de los años noventa, cuando nuestros esfuerzos fueron más intensos, los gobiernos temían que acusar a Irak de genocidio sería demasiado provocador —que pondría en riesgo los futuros acuerdos comerciales con Irak, que malgastaría su influencia en Oriente Medio, que invitaría a represalias por parte de los terroristas o que sencillamente saldría demasiado caro—.

Pero, reclamar justicia o incluso el enjuiciamiento penal no justifica la intervención humanitaria. Deberían dictarse autos de procesamiento, y los sospechosos ser arrestados si intentan salir al extranjero, pero el recurso extraordinario que es la intervención humanitaria no debería ser utilizado para hacer justicia por crímenes del pasado. Esta medida excepcional tendría que utilizarse sólo para poner fin a una masacre en curso o inminente, y no como castigo por abusos del pasado.

Al declarar que el grado de las matanzas en Irak no justifica una intervención humanitaria, en ningún caso estamos siendo insensibles ante el terrible destino del pueblo iraquí. Somos conscientes de que tuvieron lugar, y con una inquietante frecuencia, ejecuciones sumarias en Irak hasta el final del Gobierno de Sadam Husein, al igual que la tortura y otras formas de brutalidad. Estas atrocidades

*Reclamar  
justicia o  
incluso el  
enjuicia-  
miento penal  
no justifica la  
intervención  
humanitaria*

deberían ser enfrentadas con la presión pública, diplomática y económica, además del procesamiento judicial. Pero, antes de asumir el gran riesgo para las vidas humanas inherente a toda guerra, debería estar teniendo lugar, o ser inminente, una masacre masiva. Esto no fue el caso del régimen de Sadam Husein en Irak en marzo de 2003.

### **La última opción razonable**

La ausencia de una masacre en curso, ni siquiera inminente, descalifica la invasión de Irak de la categoría de intervención humanitaria. No obstante, y sobre todo teniendo en cuenta lo despiadado del mandato de Sadam Husein, sería interesante examinar los demás criterios para una intervención humanitaria y que en gran medida tampoco se cumplieron.

Tal como destacamos, debido a los riesgos significativos en juego, una invasión debería calificarse como una intervención humanitaria sólo si es la última opción razonable para poner fin a las matanzas. Debido a que, técnicamente, en el Irak de principios de 2003 no se producían matanzas masivas, esta cuestión no llegó a plantearse. Pero, es útil explorar si la intervención militar era efectivamente la última opción razonable para poner fin a los abusos que sufrían los iraquíes.

No lo era. Si el propósito de la intervención fue principalmente humanitario, entonces se tendría que haber intentado al menos otra opción antes de una invasión militar, como el enjuiciamiento penal. No hay garantía alguna de que éste hubiera sido eficaz, y se podría justificar no recurrir a él si sobre el terreno estuviesen ocurriendo matanzas a gran escala. Pero ante los abusos, más rutinarios que masivos, del Gobierno iraquí, esta alternativa a la acción militar merecía haber sido probada.

Un auto de procesamiento no es equivalente al arresto, juicio y castigo. Un simple pedazo de papel no conseguirá poner fin a masacres masivas. Pero como una solución a más largo plazo para la situación en Irak, el uso de la justicia podía considerarse como prometedora. La experiencia con el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, y el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, sugiere que una acusación judicial internacional desacredita, significativamente, incluso a los dictadores más despiadados. Este estigma debilita la base de apoyo del líder tanto en su país como en el extranjero y, a menudo, de manera inesperada. Al permitir que gobernase Sadam Husein sin el estigma de una acusación formal por genocidio y crímenes contra la humanidad, la comunidad internacional nunca intentó una medida que podría haber contribuido a su destitución, y a una reducción simultánea de los abusos gubernamentales.

Al subrayar que no se intentó el enjuiciamiento antes de la guerra, reconocemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas jamás se había planteado esta opción a lo largo de más de una década de tensiones con Irak. La resolución del Consejo en abril de 1991 sobre Irak (la Resolución 688), al condenar los "actos de represión perpetrados contra la población civil iraquí en varias partes de Irak", fue revolucionaria en su momento al ser la primera resolución que trata la represión como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Sin

embargo, el Consejo nunca insistió en ello, al no desplegar la herramienta del procesamiento para frenar esta represión. Pero, si el Gobierno de EEUU hubiese dedicado una pequeña parte de su atención, centrada plenamente en el camino a la guerra, en la justicia, existen posibilidades razonables de que el Consejo hubiera respondido.

## **El propósito humanitario**

Toda intervención humanitaria debería guiarse con el objetivo de maximizar los resultados humanitarios. Reconocemos que una intervención motivada exclusivamente por criterios humanitarios puede ser imposible de encontrar. Los gobiernos que intervienen para detener matanzas masivas, tienen, inevitablemente, muchas otras razones, por lo que no insistimos sobre la pureza de los motivos. Pero, un motivo humanitario dominante es importante ya que incide sobre numerosas decisiones, adoptadas a lo largo de la intervención y en su desenlace, que pueden determinar su éxito para proteger a las personas de todo daño.

El humanitarismo, incluso bajo una definición muy amplia que incluiría una preocupación por el bienestar del pueblo iraquí, fue como mucho un motivo subsidiario para la invasión de Irak. Las principales justificaciones previas a la invasión fueron la presunta posesión por parte del Gobierno iraquí de armas de destrucción masiva, no haberlas declarado en contra de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y sus supuestos vínculos con redes terroristas. Los funcionarios estadounidenses también se refirieron a la posibilidad de que un Irak democrático sirviese como fuerza para transformar Oriente Medio. Entre esta maraña de motivos, la crueldad de Sadam Husein hacia su propio pueblo fue referida —a veces de forma prominente— pero, en el periodo anterior a la guerra, nunca llegó a ser el factor dominante. Este no es un mero argumento académico, alteró la forma en la que se ejecutó la invasión en perjuicio del pueblo iraquí.

Si las tropas invasoras se hubieran centrado en la maximización del impacto humanitario de una intervención, habrían estado mejor preparadas para cubrir el vacío de seguridad que sucedió al derrocamiento del Gobierno iraquí. Era del todo previsible que la caída de Sadam Husein desembocaría en el desorden civil. Los levantamientos en Irak en 1991 terminaron con ejecuciones sumarias a gran escala. La política arabizante del Gobierno elevó la posibilidad de que ocurriesen enfrentamientos entre los kurdos desplazados, deseosos de recuperar sus antiguas casas, y los árabes que se habían instalado en ellas. Otros súbitos cambios de régimen, como el que ocurrió tras la retirada de los serbo-bosnios de los suburbios de Sarajevo en 1996, vinieron acompañados de violencia generalizada, saqueos e incendios provocados.

En parte para prevenir la violencia y el desorden, el jefe del Estado Mayor estadounidense antes de la guerra, el general Eric K. Shinseki, predijo que serían necesarias “varios” cientos de miles de tropas. Pero, los líderes civiles del Pentágono rechazaron esta estimación e iniciaron la guerra con bastantes menos efectivos de combate —unos 150.000 soldados—. Los motivos que subyacen detrás de esta decisión son aún inciertos, pero parecen responder a una combinación entre

la fe que tiene el Gobierno de EEUU en su armamento de alta tecnología, su escaso interés por la construcción de naciones, su poca disposición a tomarse el tiempo necesario para desplegar tropas adicionales ante el aumento de las temperaturas durante el verano iraquí, y por la creciente tensión política mientras se incrementaba la oposición a la guerra en todo el mundo, además de su excesiva dependencia en escenarios basados en sus esperanzas y en aquellos centrados en el mejor de los casos posibles. El resultado es que las tropas de la coalición se vieron superadas por la magnitud de la tarea encomendada: mantener el orden público en Irak. El saqueo fue generalizado. Los depósitos de armas fueron asaltados y vaciados. La violencia es desenfrenada.

El problema de la falta de efectivos se exacerbó al no desplegarse un número suficiente de soldados entrenados para labores de policía. Los soldados regulares están entrenados para el combate —para responder a amenazas con fuerza letal—. Pero este recurso a la fuerza letal no es apropiado y, además, sería ilegítimo, cuando de lo que se trata es de ejercer funciones de policía en una nación ocupada. La consecuencia de todo fue el goteo constante de civiles muertos cuando las tropas de la coalición —con los nervios a flor de piel ante los ataques constantes de la resistencia, algunos de los cuales con perfidia— disparaban por error contra civiles. Esto aumentó el resentimiento entre los iraquíes, e impulsó nuevos ataques contra las fuerzas de la coalición. Tropas entrenadas para labores de policía —es decir, para hacer uso de la fuerza letal tan sólo como último recurso— habría sido una opción más apropiada al desempeño de sus obligaciones de ocupación de forma humana. Pero el Pentágono no tiene como prioridad desarrollar las capacidades de policía de sus tropas, limitándose tan sólo a que unas cuantas fuesen desplegadas en Irak.

Además, L. Paul Bremen III, el administrador civil de EEUU en Irak, desmovilizó la totalidad de las fuerzas de policía y del ejército iraquí. Esto dejó a las autoridades ocupantes sin la posibilidad de hacer uso de un gran número de efectivos nacionales que podrían haber ayudado a instaurar la ley. Reconocemos que las fuerzas de seguridad o las agencias de inteligencia, que desempeñaron papeles destacados en las atrocidades cometidas en Irak, como la Guardia Especial Republicana o el *Mukhabarat*, debían ser desmantelados y sus miembros enjuiciados. Algunos miembros del ejército iraquí y de la policía también fueron cómplices en las atrocidades, pero la gran mayoría tenían una responsabilidad menor en estos hechos. Por tanto, no había ninguna justificación penal para el desmantelamiento en masa de estas fuerzas en lugar de perseguir de forma individual a los culpables. El desmantelamiento masivo tuvo serias repercusiones sobre la seguridad en Irak.

La falta de un propósito humanitario mayor también tuvo su incidencia en la actitud que tomó Washington respecto del sistema judicial que utilizaría para juzgar crímenes contra los derechos humanos cometidos por funcionarios y oficiales iraquíes. Bush, como muchos otros, deseaba que los responsables de las atrocidades cometidas en Irak compareciesen ante la justicia, pero su rechazo atávico hacia la Corte Penal Internacional (CPI) le impide recomendar el mecanismo legal con mayores posibilidades de éxito. El Ejecutivo de Bush ha insistido en que los oficiales y funcionarios iraquíes acusados sean juzgados en un “proceso dirigido

por iraquíes<sup>9</sup>. En teoría, es indudablemente preferible que Irak juzgue sus propios infractores. Pero tras tres décadas y media de Gobierno del partido Baath, el sistema judicial iraquí carece tanto de una tradición de respeto por las garantías procesales como de la capacidad para organizar y juzgar casos complejos de genocidio o de crímenes contra la humanidad. En caso de que se lleven ante los tribunales iraquíes, hay amplios motivos para considerar que serían juicios sin auténtica legitimidad.

La solución más obvia a este problema sería el establecimiento de un tribunal penal internacional para Irak —ya sea uno plenamente internacional como aquellos creados para Ruanda y la ex Yugoslavia, o un tribunal con liderazgo internacional pero con participación local, como el tribunal especial para Sierra Leona—. Aunque el Gobierno de Bush ha respaldado los ya existentes, se opone ferozmente a la idea de un tribunal internacional para Irak. El motivo de este rechazo estaría en la CPI. Ésta sería un organismo bastante irrelevante para esta tarea ya que su jurisdicción daría inicio como pronto a partir de julio de 2002, que fue cuando entró en vigor el tratado que lo creó. La mayoría de los crímenes cometidos por el Gobierno de Sadam Husein fueron anteriores a esta fecha. Pero, la oposición de Bush a la CPI es de tal dimensión que se traduce en su resistencia ante cualquier tribunal internacional para Irak, aparentemente por temor a que un tribunal de este tipo otorgue mayor credibilidad al proyecto de justicia internacional en su conjunto, y de esta forma legitimaría indirectamente al CPI. Una preocupación real por los intereses del pueblo iraquí habría reducido la probabilidad de que persistiese esta postura.

## **Cumplimiento del Derecho Humanitario**

Todo esfuerzo realizado debería asegurar que una intervención humanitaria cumple estrictamente con lo establecido en el Derecho Humanitario y con la protección de los derechos humanos internacionales. Este cumplimiento es un requisito inexcusable en todo conflicto —por lo que no podría ser menos en el caso de una intervención que se justifica por razones humanitarias—. La invasión de Irak ha cumplido, en lo esencial, con este requisito, pero no del todo. Las tropas de la coalición tuvieron especial cuidado para evitar dañar a civiles cuando atacaban objetivos fijos y preseleccionados. Pero en cuanto a los ataques a objetivos móviles de oportunidad, su historial es menos ejemplar.

Tal y como comunicó Human Rights Watch con detalle en su informe de diciembre de 2003 sobre la guerra, los esfuerzos realizados por EEUU de bombardear objetivos del liderazgo iraquí fueron un fracaso abismal. Su estadística de ningún éxito por 50 fracasos refleja un método de determinación de objetivos que rayó en lo indiscriminado, permitiendo lanzar bombas sobre comunidades en la que existía la posibilidad de que estuviera algún líder. El resultado, predecible, fue el de numerosas víctimas civiles.

Las fuerzas terrestres de EEUU, sobre todo el Ejército de tierra, también hizo uso de munición de racimo cerca de zonas pobladas, con la consiguiente y previsible pérdida de vidas civiles. Ante el hecho de que cerca de una cuarta parte de las

muerres civiles causados por el bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Yugoslavia en 1999, se atribuyen al uso de bombas de racimo, las Fuerzas Aéreas de EEUU redujeron significativamente su uso. Pero, al parecer, no fue una lección aprendida completamente por el Ejército estadounidense. Las tropas estadounidenses a menudo utilizaron munición de racimo en áreas pobladas para hacer frente a los ataques iraquíes, causando una pérdida significativa de vidas. Tal desprecio de la vida de los civiles es del todo incompatible con una intervención genuinamente humanitaria.

### **Más bien que mal**

Otro factor para evaluar la naturaleza humanitaria de una intervención es saber si está calculada de forma suficientemente razonable como para que la situación mejore y no empeore en el país invadido. Es inevitable la tentación de asegurar que cualquier cosa es mejor que vivir bajo la tiranía de Sadam Husein pero, por desgracia, también es posible imaginar escenarios peores. Por muy despiadado que fuera su régimen, el caos y una abusiva guerra civil bien podrían ser aún más mortíferas, y es todavía demasiado pronto para asegurar si este tipo de violencia podría hacer su aparición en Irak.

En marzo de 2003, cuando se inició la guerra, los Gobiernos de EEUU y del Reino Unido esperaban que el Ejecutivo iraquí se desmoronaría rápidamente, y que el país emprendería sin mayores contratiempos el camino hacia la democracia. No equiparse con las tropas necesarias para estabilizar el Irak de posguerra, redujo de forma considerable la probabilidad de que surgiese este escenario tan optimista. No obstante, el balance de las consideraciones previas a la guerra probablemente apoyaban la percepción de que Irak estaría mucho mejor sin el despiadado régimen de Sadam Husein. Pero este único factor, ante el no cumplimiento de los demás criterios, no transforma la intervención en humanitaria.

### **La aprobación de Naciones Unidas**

El respaldo previo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o de otra gran organización multilateral, es de gran valor para toda intervención humanitaria. La necesidad de convencer a los demás de lo apropiado de una intervención es una buena forma de protegerse contra una acción injustificada o pretextual. Un compromiso internacional respecto a una intervención también incrementa la probabilidad de que se destinen a ésta, y a la situación posterior, los recursos y las personas adecuadas. Además, la aprobación del Consejo de Seguridad clausura el debate sobre la legalidad de una intervención.

Sin embargo, Human Rights Watch no insiste en la aprobación por parte del Consejo de Seguridad en situaciones extremas. Actualmente, el Consejo es demasiado imperfecto como para que sea el único mecanismo para legitimar una intervención humanitaria. Su estructura de miembros permanentes constituye una reliquia del mundo que siguió a la II Guerra Mundial, al igual que su sistema de

veto según el cual estos miembros permanentes pueden bloquear por los motivos más peregrinos el rescate de personas enfrentadas a masacres. Ante estos defectos, la paciencia que se le otorga al proceso de aprobación del Consejo disminuía de forma considerable si estuviese en curso alguna masacre a gran escala. Sin embargo, al no existir tal urgencia en el caso de Irak, a principios de 2003, la no aprobación del Consejo de Seguridad, de ningún otro organismo multilateral, pesa sobremanera en la valoración de la justificación humanitaria esgrimida por las partes que intervinieron.

Obviamente, reconocemos que el Consejo de Seguridad no fue solicitado en ningún momento para considerar la cuestión de una intervención puramente humanitaria en Irak. El caso principal que le fue presentado se basó en la supuesta posesión por parte del Gobierno iraquí de armas de destrucción masiva, y en que no las declarase. Pero, la aprobación podría haber mejorado al menos algunos de los factores que impiden que la invasión pueda ser considerada como genuinamente humanitaria. Ante todo, una invasión aprobada por el Consejo podría haber supuesto que un mayor número de tropas extranjeras se incorporasen a la coalición compuesta mayoritariamente por soldados estadounidenses y británicos y, por tanto, una mejor preparación para enfrentar el caos posbélico.

## **Conclusión**

En conclusión, la invasión de Irak no cumplió todos los requisitos para ser considerada una intervención humanitaria. Las muertes oficiales que tenían lugar en Irak en aquel momento no eran de una naturaleza tan excepcional que justificasen tal intervención. Además, la intervención no era la última opción razonable para intentar poner fin a las atrocidades que ocurrían en Irak. La intervención no fue motivada principalmente por consideraciones humanitarias. Tampoco fue conducida de una forma que maximizase el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Ni siquiera fue aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque cuando se iniciaron las operaciones era lícito suponer que el pueblo iraquí saldría mejor parado, no fue diseñada ni ejecutada con los intereses de la sociedad iraquí como principal consideración.

Al comienzo de este texto destacamos que la controvertida invasión de Irak contrastaba con las tres intervenciones en África (Liberia, Sierra Leona, RDC). Al hacerlo no sugerimos que estas intervenciones estuviesen libres de problemas. Todas sufrieron en mayor o menor grado y por uno u otro motivo, ya sea por un número de efectivos inadecuado, de esfuerzos insuficientes para desarmar y desmovilizar a las fuerzas abusivas, y de poca atención prestada para la instauración del imperio de la ley y de la justicia. Pero, en todas las intervenciones africanas el despliegue se realizó ante una masacre en curso, fueron motivadas, en parte, por consideraciones humanitarias, fueron conducidas con un aparente respeto por el Derecho Internacional Humanitario y, aunque sea discutible, dejaron al país en mejores condiciones a las anteriores, y además contaron con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es significativo que todas estas intervenciones contaron con el beneplácito de los Gobiernos relevantes, lo cual indica-

ría que los estándares para evaluarlas son más permisivos que en los casos de intervenciones no consensuadas.

Sin embargo, incluso considerando los problemas experimentados en las intervenciones en África, el perfil extremadamente elevado de la guerra en Irak supone que ésta tiene un mayor potencial para influir sobre la percepción de la opinión pública respecto a futuras intervenciones. Sus partidarios siguen intentando justificarla como humanitaria, cuando no lo fue, corriendo el riesgo de desprestigiar un mecanismo que, a pesar de todo, ha logrado mantener su viabilidad en este nuevo siglo como instrumento para salvar a personas de la masacre.

La guerra en Irak subraya la necesidad de una mejor comprensión de cuándo es justificable una intervención militar por motivos humanitarios. La Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía Estatal supuso una importante iniciativa para definir estos parámetros. Human Rights Watch también ha contribuido periódicamente a este debate y varios autores académicos han aportado sus propias opiniones. Pero ningún organismo intergubernamental ha ofrecido criterios para definir la intervención humanitaria.

Esta reticencia oficial no sorprende ya que los gobiernos no son partidarios de contemplar posibles intrusiones no consentidas en sus países. Pero la intervención humanitaria no parece que sea algo pasajero, está aquí para quedarse — como respuesta importante y apropiada para personas que se encuentran ante situaciones de matanzas masivas—. Ante la ausencia de un consenso internacional sobre las condiciones para tal intervención, los gobiernos se aprovechan y abusan del concepto, tal y como lo ha hecho EEUU para justificar la guerra en Irak. Human Rights Watch hace un llamamiento a las organizaciones intergubernamentales, sobre todo a los órganos políticos de Naciones Unidas, para poner fin al tabú que existe sobre el debate respecto a la intervención humanitaria. Cierta consenso sobre estas condiciones, además de promover el uso apropiado de este tipo de intervenciones, contribuiría a prevenir el abuso del concepto y, por tanto, ayudaría a preservar una herramienta necesaria para algunas de las víctimas más vulnerables del mundo.